Violencia en la formación del Estado salvadoreño en el siglo XX

Violence in the formation of the Salvadoran State in the 20th century

Evelin Gutiérrez de Doradea

Universidad de El Salvador

evelingutierrez@ues.edu.sv

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7508-7511>

Resumen

El ensayo examina el papel de la violencia estatal en la construcción del Estado salvadoreño a lo largo del siglo XX, destacando cómo los gobiernos militares y autoritarios utilizaron la coerción y la represión para mantener el control político. Para el análisis se toman 3 casos específicos: la masacre indígena de 1932, la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador de 1975 y la masacre de El Mozote en 1981. Se destaca que, la violencia estatal fue una herramienta clave utilizada por todos los gobiernos para consolidar el poder de las élites económicas y políticas, revelando no sólo el uso legítimo del monopolio de la violencia por parte del Estado para conseguir sus fines, sino también, la propia naturaleza de los regímenes que buscaban favorecer la concentración del poder y la exclusión social. A lo largo de la historia, la represión fue dirigida a la población, pero principalmente a aquellos que se oponían a la estructura dominante, incluidos indígenas, estudiantes y campesinos, con el objetivo de eliminar cualquier amenaza al orden establecido. El artículo sostiene que la violencia de Estado fue un medio para imponer el orden político y social sobre la población, así como para imponer y resguardar el poder de las élites, garantizando la estabilidad de un sistema económico que favorecía a unos pocos en detrimento de las mayorías y profundizando las desigualdades sociales. Este análisis permite comprender la interrelación entre violencia, poder y Estado, demostrando cómo la represión ha sido una constante en la historia política salvadoreña y en la construcción del Estado nacional.

Palabras clave: Estado nación, estructura social, historia, poder político, sistema económico.

Abstract

The essay examines the role of state violence in the construction of the Salvadoran State throughout the 20th century, highlighting how military and authoritarian governments used coercion and repression to maintain political control. For the analysis, three specific cases are taken: the indigenous massacre of 1932, the massacre of students at the University of El Salvador in 1975, and the El Mozote massacre in 1981. It is highlighted that state violence was a key tool used by all governments to consolidate the power of economic and political elites, revealing not only the legitimate use of the monopoly of violence by the State to achieve its ends, but also the very nature of the regimes that sought to favor the concentration of power and social exclusion. Throughout history, repression was directed at the population, but mainly at those who opposed the dominant structure, including indigenous people, students and peasants, with the aim of eliminating any threat to the established order. The article argues that state violence was a means to impose political and social order and control over the population, as well as to impose and safeguard the power of the elites, guaranteeing the stability of an economic system that favored a few to the detriment of the majority and deepening social inequalities. This analysis allows us to understand the interrelationship between violence, power and the State, demonstrating how repression has been a constant in Salvadoran political history and in the construction of the national State.

Keywords: Nation state, social structure, history, political power, economic system.

1. Introducción

En América Latina, durante gran parte del siglo XX, la violencia estatal fue un rasgo predominante en la práctica política, encabezado principalmente por gobiernos militares y autoritarios. Esto tuvo un impacto profundo en la vida política y social de los países, influyendo en la manera en que el Estado se conduce hasta hoy. Al respecto, Villavicencio y Bengoa señalan que «Los aparatos coercitivos del Estado han sido desde sus inicios una de

las herramientas fundamentales para la reproducción de las formas de ordenamiento del mismo» (Bengoa & Villavicencio, 2013, p. 2); estos han utilizado o se han valido de instituciones como la policía, los ejércitos y los mecanismos punitivos (legales o no) para «castigar» aquello que vaya en contra del orden estatal, por lo que forman parte fundamental de las dinámicas económicas y políticas a lo largo de la historia.

En El Salvador esto no ha sido la excepción. Bajo la conducción de gobiernos militares, el ejercicio del poder político era incuestionable, sin lugar para el debate o la negociación. Estos gobiernos se caracterizaron por ser represivos, por la censura, la violación de derechos humanos y la concentración de poder en manos de una minoría privilegiada. Aunque hubo periodos en los que se registraron experiencias electorales permitiendo cierta participación política electoral, lejos de ampliar las opciones políticas, buscaron más bien legitimar la permanencia de militares o las élites económicas y políticas en el poder, y éstos no dudaban en utilizar la violencia y el fraude electoral para asegurar su continuidad (López Bernal, 2015). Así, el Estado salvadoreño en buena parte del siglo XX ha sido dirigido en su mayoría por gobiernos autoritarios, militares y represivos, plegados o aliados a los intereses de élites económicas; y la sociedad, al organizarse para denunciar las injusticias y atropellos a sus derechos, tuvo siempre como respuesta, la violencia de Estado.

Durante el siglo XX, se puede evidenciar la represión a cualquier indicio de protestas en contra del orden establecido, por ejemplo, la masacre de indígenas de 1932; la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) de 1975 y la masacre de El Mozote de 1981, entre muchas otras ejecutadas por militares. Cada masacre muestra a la violencia como mecanismo de control y orden social dejando un claro mensaje de intolerancia ante cualquier forma de organización que pusiera en peligro el orden. Estas masacres hacen comprender cómo la violencia fue modelando la historia política de El Salvador convirtiéndose en una variable constante en la formación del Estado. Pero, ¿cómo se relacionan algunos de los principales hechos de violencia en El Salvador con su historia política y la formación del Estado salvadoreño en el siglo XX?

2. Violencia en el nacimiento del Estado nación

El proceso de formación del Estado salvadoreño invita a una reflexión sobre las formas particulares de ejercer violencia que lo fueron modelando para entender sus dinámicas de acción, requiere visualizarlo como ente garante de un orden político y social que responde a intereses particulares por sobre los generales.

Bolívar afirma que, históricamente, «la formación del Estado es resultado o expresión de un proceso paulatino de concentración del poder y, por esa vía, de acumulación de los recursos de la coerción» (Bolívar, 1999, p. 12). Por su parte y siguiendo esa misma lógica para el caso salvadoreño, Salgado afirma que la historia de la violencia «parte del proceso de acumulación originaria de capital en El Salvador», (Salgado, 2011, p. 244) en el que se implementó un sistema de producción capitalista como sistema de organización social y político dominante que generó desde un inicio, desigualdad en la distribución de ingresos y modeló las relaciones entre Estado y sociedad. Al respecto, Paley también menciona la importancia de la violencia del colonialismo en el asentamiento de las bases para la formación de los Estados nación actuales, señalando cómo posteriormente, las luchas de independencia no fueron más que disputas de poder entre élites económicas para obtener autonomía en la conducción política; afirma que las élites buscaron implementar sistemas políticos basados en el racismo y el despotismo para asegurar su permanencia en el poder (Paley, 2014).

Para esta época, aunque se rompieron ataduras imperialistas, con la élite criolla las estructuras internas de sometimiento continuaron reproduciéndose al interior de las recién creadas naciones, sentando las bases para consolidar una nueva estructura social; de tal manera que, aunque el movimiento independentista marcó un punto de quiebre con el poder imperial español, en realidad ello no significó una ruptura con las estructuras tradicionales de dominación. En El Salvador, las élites criollas que tomaron el control continuaron el modelo de sometimiento de las clases más pobres, perpetuando ese modelo e instaurando nuevas jerarquías de poder, lo que consolidó un orden social desigual y excluyente. Por ello, Montoya y Edgardo afirman que «La toma del poder por los criollos a

principios del siglo pasado no fue la consumación de la independencia absoluta y teórica [...] significó la sustitución de una dictadura de la clase dominante extranjera –la española– por la dictadura de una clase dominante centroamericana» (Montoya & Edgardo, 2012, p. 101).

Es así como las élites económicas siempre estuvieron en control del Estado, operando en la estructura política mediante agentes que impulsaban políticas económicas a su favor *o incluso (re)estructurando a su favor el mismísimo régimen político* (González, 2022). Desde entonces, ante cualquier intento de cambiar las condiciones y el orden establecido, el Estado echa mano del monopolio de la violencia para controlar, ordenar y regular. Uno de los conceptos que mejor podría explicar la relación entre Estado y violencia en el contexto salvadoreño, es el que presenta O'Donnell, quien entiende al Estado como el componente específicamente político de dominación en una sociedad territorial delimitada. Resaltan dos elementos para el análisis: el componente político y la dominación. O'Donnell expone que dominación es la *capacidad, actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso, pero no necesariamente contra su resistencia* (O'Donnell, 1978, p. 1158). Lo político, en su sentido específico, se refiere a una dimensión particular de la dominación caracterizada por el control predominante de los medios de coerción física dentro de un territorio exclusivo y delimitado.

A la luz de esta definición, se puede explicar la importancia o necesidad de las élites económicas del país por ser parte del Estado o tenerlo bajo su autoridad, pues les da también control sobre los medios de coerción física e imponer su voluntad sobre otros de acuerdo con sus intereses. Por otra parte, Herrera, retomando a Weber, define el Estado «como una comunidad humana que de manera exitosa se subroga el legítimo monopolio de la fuerza física o de la violencia dentro de un territorio dado. El uso de la violencia queda en manos de personas o grupos que el Estado define y establece dentro de su organización». (Romero Herrera, 2010, p. 115) Bajo este argumento, la violencia es propia del ejercicio del Estado, y hasta justificada para mantener la paz (Neocleous, 2014). Con este argumento y reforzado también por lo que expone Herrera, «la acumulación y concentración de medios coercitivos produce Estados...» (Romero Herrera, 2010, p. 117).

3. Violencia de Estado en El Salvador del siglo XX

Durante todo el siglo XX El Salvador transitó por diferentes modelos económicos propiciando la concentración de recursos. Cada modelo definía la política a implementar y el tipo de Estado necesario para asegurarlo (González, 2022); así, los hechos de violencia del Estado reflejan la necesidad de las élites de mantener el control político. Por otro lado, caracterizan al Estado en cuanto a la forma de ordenar a la sociedad mediante el uso de la violencia. Pero en términos de Bolívar, el orden no significaba estabilidad, justicia o democracia, más bien, dinámicas de autoridad, obediencia y regulación social (Bolívar, 1999). En este sentido, Según Cruz, la violencia en el país se ha manifestado de distintas maneras, pero siempre ha estado caracterizada por la enorme magnitud del fenómeno (Cruz, 1997); señala además que la violencia en El Salvador tiene raíces históricas y que no emergió repentinamente, sino que ha evolucionado a lo largo de décadas. Al respecto y no menos importante es el significado de esta y el daño causado (Pearce, 2020), tanto a las víctimas como a los sobrevivientes de cada uno de estos actos violentos.

4. Principales hechos de violencia en El Salvador en el siglo XX

4.1 Masacre de indígenas de 1932

La insurrección y masacre de indígenas y campesinos de 1932 en el occidente del país es uno de los capítulos más oscuros de la historia salvadoreña, que ha dejado profundas huellas en la memoria colectiva de la población, debido a la represión y a la magnitud de la violencia ejercida desde el Estado. Los hechos ocurrieron en un contexto de crisis internacional, de inestabilidad política nacional y dentro de una profunda crisis económica del modelo de producción cafetalero, que generó desigualdad social y malas condiciones de vida para los campesinos. Hernández señala que, el Censo de Población de 1930, «recopilaba el sorprendente dato de la concentración de medios de producción: el 8 % del millón y medio de habitantes de la época era propietario de medios de producción y el 92

% de la población pertenecía a la clase de los desposeídos de medios de producción.» (Hernández, 2016, p. 27)

El levantamiento se originó a raíz del golpe de Estado al presidente Arturo Araujo por parte del general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931. De acuerdo con lo narrado por Molinari, la sublevación del 22 de enero de 1932 fue un levantamiento campesino espontáneo y descoordinado, con la participación de comunidades locales y el apoyo de dirigentes del partido comunista. La autora afirma que, los sublevados estaban pobremente armados y tomaron varios pueblos; frente a ello, la respuesta del gobierno fue rápida y brutal ya que, en 48 horas, las fuerzas militares sofocaron la insurrección. Sin embargo, la represión continuó durante dos semanas con asesinatos masivos de campesinos e indígenas, calculándose entre 10 000 y 30 000 muertos. La represión también llevó al desmantelamiento de sindicatos y grupos críticos al gobierno; desde el gobierno, se crearon las llamadas «guardias cívicas» que se encargaban de vigilar y controlar a la población, estos grupos se caracterizaron por cometer abusos con la población. Todo este proceso llevó a la consolidación del poder estatal y de los terratenientes sobre las comunidades indígenas. Esta red fue sólo el inicio de la represión sistemática que perduró hasta la guerra civil salvadoreña, 50 años después (Molinari, 2023).

El general Martínez, ya como presidente electo, estableció las líneas maestras de su visión gubernamental, con ellas buscaba en primer lugar, asegurar el orden, el control y la disciplina sobre los gobernados, manteniendo bajo control cualquier amenaza subversiva. Para ello, de acuerdo con lo narrado por López Bernal, Martínez, «organizó su base de apoyo entre los empresarios, los agricultores y los profesionales, a quienes les explicó la situación y la necesidad de contar con nuevo armamento... El general y el ejército habían pasado a ser los rectores de la vida salvadoreña. Como condición fundamental: el orden, la disciplina, la eliminación de toda intriga de índole política» (López Bernal, 2015).

4.2 Masacre de estudiantes de la UES de 1975

La Universidad de El Salvador fue una de las principales instituciones que denunciaba y retaba a los gobiernos mediante marchas y denuncias sobre la violencia del Estado contra

la sociedad salvadoreña en general y contra su autonomía institucional. Por décadas, esta institución fue objeto de repetidos actos de intervención militar y represión violenta, muchos de los cuáles culminaron en masacres estudiantiles y de trabajadores universitarios, tanto dentro del campus universitario como en marchas y concentraciones públicas. Una de las más emblemáticas fue el caso de la masacre de estudiantes de la UES de 1975 por parte de las Fuerzas Militares del Estado. El 30 de julio de 1975, una multitudinaria manifestación de estudiantes universitarios fue interceptada y disuelta por medio de disparos indiscriminados por miembros de la Guardia Nacional y policías bajo el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, dejando en la 25 Avenida Norte, una de las calles más transitadas de la capital salvadoreña, una cantidad indefinida de muertos, heridos y desaparecidos.

El presidente Molina asumió el cargo el 1 de julio de 1972, y unas semanas después, el ejército tomó control de la Universidad de El Salvador. Este acto conlleva un simbolismo profundo en el contexto de ese momento, pues la Universidad de El Salvador era el principal centro de educación superior y de investigación del país, asimismo, en su interior se gestaba un fuerte movimiento estudiantil opositor revolucionario, y ahora, había pasado a estar bajo el control y administración gubernamental-militar. Al respecto, Zúñiga señala que, «una de las primeras acciones de su gobierno fue intervenir militarmente y cerrar la UES. La intervención se extendió entre 1972 y 1974. Su gobierno formó parte de la seguidilla de gobiernos militares del Partido de Conciliación Nacional (PCN), que se caracterizaron por impulsar políticas de carácter reformista al tiempo que reprimieron fuertemente a la oposición política (tanto a los partidos socialdemócratas como a los de izquierda).» (Núñez, 2023, p. 151)

La marcha estudiantil fue organizada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) y tenía como objetivo protestar por la intervención militar del Centro Regional Universitario de Santa Ana, en el occidente del país, recién ocurrida el 24 de julio de 1975. Con la intervención del recinto universitario el gobierno buscaba impedir un desfile bufo, en el que se cuestionarían las políticas ejecutadas por el

presidente Molina y se exigirían mejoras en el financiamiento de la institución de educación superior:

«La represión policial nunca fue investigada, no hubo juzgados ni castigados por los estudiantes asesinados y desaparecidos... La masacre del 30 de julio fue un hecho más, de los tantos sucedidos en los aciagos años setenta, que quedaron en la impunidad. Para el gobierno militar la Universidad era un lugar ocupado por la izquierda comunista por lo que toda protesta que saliera de ahí era considerada como parte de la estrategia de los comunistas para desestabilizar el país» (Argueta, 2022). El régimen, culpó a los estudiantes por todo lo sucedido el 30 de julio, asegurando que agredieron a las fuerzas policiales.

El aparato estatal se había encargado, a través de los años, de forjar los cuerpos represivos para mantener el orden y control. Así, «La Guardia Nacional era un cuerpo selecto de represión fogueado en el mantenimiento del orden en el campo». Adquirió un gran desarrollo después de la represión de 1932. Autoritarios y arbitrarios... la gente decía con humor negro que los guardias nacionales mataban primero y después preguntaban.» (Hernández, 2016, p. 32)

4.3 Masacre de El Mozote de 1981

En 1981, como antesala de lo que sería una larga y devastadora guerra civil, el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas de El Salvador llevó a cabo un operativo militar con el objetivo de eliminar los cuadros guerrilleros ahí asentados. En este operativo se perpetró la masacre de El Mozote y otros lugares aledaños, ubicados en el departamento de Morazán, en el oriente del país. Según fuentes oficiales, entre el 8 y el 14 de diciembre, fueron asesinadas al menos unas 989 personas. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), logró demostrar que, las víctimas de las cuales más de la mitad eran niños, fueron encontradas en fosas comunes, que fueron asesinadas en grupo, en el mismo lugar y al mismo tiempo; asimismo, muchas de ellas habían recibido múltiples disparos mientras estaban tirados en el suelo. Con ello, el equipo de antropólogos logró descartar las teorías de una confrontación armada entre dos grupos, (Rostica et al., 2020) y se visibilizó la magnitud de la violencia ejercida contra esa población.

Al respecto, los autores mencionan que: «El año 1981 marcó el despliegue de esta ola de masacres a nivel nacional. Esta estrategia -implementada por las Fuerzas Armadas para socavar las bases de apoyo de la guerrilla y forzar el desplazamiento de las poblaciones de las “zonas controladas”- continuó alrededor de dos años más con similar intensidad. La ola de masacres formó parte de la “contraofensiva”, entendida como la respuesta de las Fuerzas Armadas a la “Ofensiva Final” protagonizada por el FMLN en enero de 1981. Presentada como una “campaña de pacificación”, la contraofensiva implicó una verdadera política de limpieza que incluyó fuertes operativos realizados por el Ejército contra la población civil, especialmente en el norte del país (los departamentos de Chalatenango, Morazán y Cabañas), donde algunas de las guerrillas se asentaban» (Rostica et al., 2020, p. 64)

Mediante la implementación de este tipo de estrategias militares, se identifica claramente un patrón de violencia estatal extrema, denominada como «tierra arrasada», en las que elementos de las Fuerzas Armadas y paramilitares realizaron numerosas ejecuciones a campesinos, mujeres y niños sin que estos opusieran algún tipo de resistencia, únicamente por ser considerados como colaboradores de la guerrilla (Pérez-Sales & García, 2007). La masacre de El Mozote fue parte de una estrategia militar de las Fuerzas Armadas de El Salvador más amplia y sistemática organizada desde los mandos superiores del gobierno, así lo describió la Comisión de la Verdad: «Es imposible sostener que este patrón de conducta sea atribuible solo a los mandos locales, y que haya sido desconocido de los mandos superiores. Como se ha narrado, las masacres de la población campesina fueron denunciadas reiteradamente.» (Comisión de la Verdad para El Salvador et al., 1993, p. 131) Con ello se señalaba que no existía evidencia de que se había hecho algún esfuerzo por investigar las masacres, y que las autoridades tacharon estas denuncias como propaganda calumniosa de sus adversarios.

Los hechos y masacres sucedidos durante del siglo XX muestran cómo El Salvador, a lo largo de su historia y desde su conformación como Estado nación, ha venido construyendo sus bases políticas en la violencia. Incluso después de 12 años de guerra civil, aunque entró a un proceso de «pacificación» entre la guerrilla y el gobierno, las condiciones

estructurales que generaron pobreza y exclusión no cambiaron, pues los cambios en las estructuras económicas a nivel mundial, la globalización y el comercio internacional demandaban nuevas dinámicas de acción que permitieron la continuación de un modelo económico nacional excluyente, concentrando de recursos en unas pocas manos y para ello, se necesitaba un Estado garante, que asegurara que estas condiciones no cambiaran.

En la Tabla 1, se muestra la relación de estos tres hechos de violencia ejecutados por militares y el tipo de Estado necesario para ejercer el control y orden político.

Tabla 1. *Violencia y Estado en El Salvador del siglo XX*

Año	Modelo económico	Régimen político/Jefe de Estado (JE)	Hechos de violencia	Objetivo
1932	Agroexportador cafetalero	Dictadura militar de la oligarquía liberal cafetalera. (JE): Gral. Maximiliano Hernández Martínez	Masacre de indígenas de 1932. Asesinato de miles de indígenas de la zona occidental del país	Mantener el control político y social, así como el despojo de sus tierras para el cultivo del café
1975	Agroexportación/industrialización	Dictadura militar. (JE): coronel Arturo Armando Molina	Masacre de estudiantes de la UES de 1975. Represión y asesinato de decenas de estudiantes y un número desconocido de desaparecidos	Eliminar las voces críticas de líderes intelectuales contra el orden establecido por la dictadura militar
1981	Neoliberalismo	Democracia/autoritarismo militar (JE): Junta Revolucionaria de Gobierno	Masacre de El Mozote de 1981. Asesinato de miles de campesinos del oriente del país	Eliminar la base de apoyo social del movimiento guerrillero en el

como estrategia	contexto de guerra
contrainsurgente	civil

Nota. Elaboración propia con basada en los postulados de Artiga González (2022), Hernández (2016) y Molinari (2023).

La Tabla 1 deja a la vista la formación de un Estado garante del orden económico y social que utiliza la violencia para lograr sus objetivos. Puede advertirse la represión y violencia llevada al extremo en forma de masacres de gran magnitud a poblaciones muy particulares, buscando suprimir los obstáculos para mantener el modelo económico predominante por sobre las necesidades de la mayoría, mediante un régimen político que fue modificándose y construyéndose de acuerdo con las necesidades de las élites económicas, procurando mantener la legalidad y el monopolio de la violencia. Salta a la vista, como durante todo en el siglo XX y en distintas épocas, con diferente tipo de población, la respuesta estatal fue siempre el uso sistemático de la violencia como medio de control y dominación.

5. Conclusiones

El Estado salvadoreño a lo largo de siglo XX se forjó mediante arreglos y acuerdos entre élites político-económicas, utilizando la represión y violencia contra la población para mantener o propiciar las condiciones sociales para asegurar el modelo económico imperante. La historia política de El Salvador en el siglo XX se ha desarrollado bajo la conformación de un Estado autoritario, con regímenes políticos de corte militar propicios a utilizar la violencia como forma principal de ejercer el control, orden y regulación; las masacres ejecutadas a lo largo del siglo XX, la magnitud de cada fenómeno, la población hacia la que iba dirigida y los objetivos perseguidos por esos actos, denotan la instrumentalización de la violencia para lograr sus objetivos. Su justificación legal, es el monopolio de la violencia por parte del Estado como ente de dominio político del país.

La dinámica de relación entre violencia y Estado debe verse más allá de una caracterización, ya que, si bien cada acto perpetrado tiene sus propias distinciones, dos

elementos son comunes: los militares como ejecutores directos; y el significado y el daño generado a las víctimas por dichos actos, que, en términos de lo planteado por Pearce, puede potencialmente constituir, normalizar o destruir órdenes sociales, lo que paralelamente ha llevado a la formación y construcción del Estado.

Referencias

- Argueta, R. (2022). La construcción de las memorias y los héroes salvadoreños en el siglo XX: El caso de los estudiantes universitarios y los militares. En *De[s]marcaciones. Aportes científicos de la Facultad de Ciencias y Humanidades*. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades <INICH>.
- Bengoia Valdés, A. J., & Villavicencio Rodríguez, E. (2013). *Políticas de la violencia estatal: Los casos de Colombia y El Salvador*. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/10811>
- Bolívar, I. J. (1999). Sociedad y Estado: La configuración del monopolio de la violencia. *REVISTA CONTROVERSIA*, 175, Article 175.
- Cruz, J. M. (1997). Los factores posibilitadores y las expresiones de la violencia en los noventa. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 52(588), 977-992.
- González, Á. A. (2022). El dualismo analítico agente/estructura y las relaciones entre economía y política en El Salvador. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 77(769), Article 769. <https://doi.org/10.51378/eca.v77i769.7052>
- Hernández, E. (2016). La masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. *La Universidad*, 9(30), Article 30. <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/launiversidad/article/view/748>
- López Bernal, C. G. (2015). *El Salvador: Historia Contemporánea, 1808-2010*. Universidad de El Salvador.
- Molinari, L. (2023). La “matanza” de 1932 en El Salvador: Prácticas sociales genocidas y sus representaciones sociales. *Question/Cuestión*, 3(74), Article 74. <https://doi.org/10.24215/16696581e787>

- Montoya, C., & Edgardo, J. (2012). "Un largo y penoso proceso": Severo Martínez Peláez y la Historia social sobre la Independencia de Centroamérica. *Bajo El Volcán*, 12(19), Article 19.
- Neocleous, M. (2014). *War power, police power*. Edinburgh University Press.
- Núñez, M. Z. (2023). "Estudiantes como sombras del futuro": Las voces de las víctimas de la masacre del 30 de julio de 1975 en las memorias públicas de la Universidad de El Salvador. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, 62(163), Article 163. <https://doi.org/10.15517/revfil.2023.55102>
- O'Donnell, G. (1978). Apuntes para una teoría del Estado. *Revista Mexicana de Sociología*, 40(4), 1157-1199. <https://doi.org/10.2307/3539655>
- Paley, D. (2014). *Drug war capitalism*. AK Press.
- Pearce, J. (2020). *Politics without Violence?: Towards a Post-Weberian Enlightenment*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26082-8>
- Pérez-Sales, P., & García, S. N. (2007). *Resistencias contra el olvido: Trabajo psicosocial en procesos de exhumaciones*. Editorial GEDISA.
- Romero Herrera, J. (2010). Violencia, autonomía militar y procesos de formación del Estado y la constitución de la Nación. *Revista Criminalidad*, 52(2), 113-131.
- Rostica, J., Kovalskis, M., Molinari, L., & Molina, M. O. (2020). La masacre de El Mozote en El Salvador: Una aproximación a la responsabilidad argentina. *e-I@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 18(71), Article 71. <https://publicaciones sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/5359>
- Salgado, M. (2011). Factores clave para entender la violencia en El Salvador. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 66(725), Article 725. <https://doi.org/10.51378/eca.v66i725.3427>
- Comisión de la Verdad para El Salvador, Betancur, B., Figueredo Planchart, R., & Buergenthal, T. (1993). . *De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El*

Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador.

<https://repositorio.iidh.ed.cr/handle/123456789/1971>